

ECONOMÍA Y TRABAJO



Yolanda Díaz, en una rueda de prensa el 18 de junio, tras recibir el informe de la comisión asesora sobre el salario mínimo. / ALBERTO ORTEGA (EP)

Gobierno y sindicatos pactan subir el salario mínimo 15 euros al mes

El acuerdo, que no suscribe la patronal, deja el sueldo base en 965 euros mensuales

GORKA R. PÉREZ, Madrid
El Gobierno y los sindicatos pactaron la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 15 euros al mes durante una reunión convocada de urgencia anoche. Tras una jornada en la que todas las partes habían adelantado que el cierre de las negociaciones estaba cerca, al final del día por fin alcanzaron un acuerdo, que fija la subida en el rango intermedio de la horquilla de entre 12 euros y 19 euros que proponía el comité de expertos convocados por el Ejecutivo. El pacto, del que se ha apeado la patronal, deja el sueldo mínimo en 965 mensuales en 14 pagas con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre.

El informe de los expertos proyectaba una senda de subidas del

SMI con la que se pretendía que este alcance el 60% del sueldo medio en 2023, en línea con las recomendaciones de Bruselas y a lo que se había comprometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el comunicado que emitieron conjuntamente el Gobierno y los sindicatos tras la reunión se determina la decisión de ejecutar una subida para lo que queda de año, pero no se dan detalles acerca de esa trayectoria de crecimiento con la que se pretende alcanzar los 1.049 euros como salario base en 2023. Tampoco se determina cuál será la subida para 2022, y que los sindicatos venían reclamando que debía ser la necesaria para elevar el SMI hasta los 1.000 euros. En una entrevista en TVE ayer, la vicepresi-

denta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eludió referirse a qué ocurrirá en 2022 y se limitó a mirar a dos años vista. "Tenemos el compromiso de cumplir con la senda", insistió.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, calificó de "positivo" el acuerdo, y consideró que la posición del Ejecutivo de aumentar el salario mínimo "va en el camino adecuado". Al mismo tiempo, demandó al Gobierno que convocase la mesa de negociación "cuanto antes", para a partir del 1 de enero de 2022 "llegar ya a los 1.000 euros mínimos mensuales". El sindicato insta al Ejecutivo a ser "valiente", y a cumplir "con sus compromisos".

A lo largo de las últimas sema-

nas, tanto UGT como CC OO habían advertido al Gobierno de que no firmarían ningún acuerdo en el que solo se acordase una subida para 2021. "Si no hay una senda definida para 2023 que no cuenten con nosotros", llegó a declarar Unai Sordo, secretario general de CC OO. Esa amenaza fue compartida por su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, quien afeó la parálisis del Gobierno una vez expuestos los posicionamientos de las partes en las dos reuniones mantenidas a lo largo del mes, y anunció movilizaciones si se mantenía congelado.

Junto con la cuantía final, otra de las incógnitas a resolver era desde cuándo se aplicaría la subida. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía,

apostaba porque entrase en vigor a partir de octubre, mientras que Yolanda Díaz había mostrado su compromiso para que la subida del salario mínimo se aprobase con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre, como se hará finalmente.

Enroque de la CEOE

La subida, no obstante, supone desbloquear una decisión que había enfrentado a los dos socios de gobierno: Unidas Podemos, a través de Díaz, defendía desde hace meses que había que aumentar el salario mínimo desde enero, al igual que se hizo con las mejoras a funcionarios y pensionistas. Nadia Calviño consideraba, en cambio, que había que esperar a que la recuperación tomase cuerpo y los datos de empleo mostrasen cierto vigor antes de adoptar cualquier decisión que pudiera perturbar la reactivación económica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deshizo el empate este verano tras el buen comportamiento del mercado laboral. A principios de septiembre, aseguró que la subida del SMI sería "inminente".

Una vez desbloqueada la decisión de subir el SMI, solo quedaba pendiente decidir la cuantía de la subida, el período y cerrar un acuerdo con los agentes sociales. Pero ha sido ahí donde el Gobierno ha encontrado ciertas dificultades. Yolanda Díaz reinició las negociaciones hace 10 días, pero de inmediato se dio cuenta de que la patronal estaba enrocada en contra del incremento del SMI este año. Y eso a pesar de que Trabajo rebajó sus aspiraciones y llegó a ofrecer a la patronal una subida más tibia de lo que pretendía.

Los sindicatos también amenazaron con levantarse de la mesa si el Gobierno no garantizaba que el salario mínimo ascenderá a los 1.000 euros en 2022. Finalmente, la subida se produce sin el acuerdo de la patronal, pero con el respaldo de los sindicatos. "Hay una paradoja, el Estado te dice 'te invito a cenar, pero paga tú la cena', se justificó ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Díaz lamentó anoche de nuevo que la patronal se sentara en la mesa "diciendo cero" [de incremento] y saliera "diciendo cero". "Estas cantidades [15 euros al año] no perjudican a ninguna empresa", remachó.

El Ejecutivo ultima la vía para las ayudas a la rehabilitación

Dos decretos liberarán este mes 5.500 millones de los fondos europeos

JOSÉ LUIS ARANDA, Madrid
Un decreto y un decreto ley darán el gran pistoletazo de salida a la ola de rehabilitación de viviendas que España ha de acometer con la ayuda de los fondos europeos de recuperación. La componente 2 del plan re-

mitido a Bruselas contempla partidas para esta materia por 6.820 millones, de los que 5.520 millones dependen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Su titular, Raquel Sánchez, prometió ayer en el Congreso que esa cantidad

se comenzará a movilizar "en las próximas semanas".

Según explicó la ministra, el grueso de las partidas son los 2.970 millones destinados a la rehabilitación residencial, mediante los cuales se pretende intervenir en unas 510.000 viviendas. Los planes también contemplan 1.000 millones para construir unas 20.000 viviendas destinadas al alquiler social, 450 millones para deducciones fiscales y 1.100 millones en avales para las comunidades de propietarios que se decidan a acometer obras de reforma.

Sánchez señaló que las ayudas, procedentes de los fondos europeos para paliar la crisis de la covid, se encauzarán en la parte que depende de su ministerio mediante dos nor-

mas que se aprobarán este mes, según una fuente del ministerio. Esta fuente explica que la primera es un real decreto para regular las bases con las que las comunidades autónomas podrán sacar luego sus programas de ayuda, ya que son estas las que tienen transferidas la mayoría de las competencias en vivienda. El decreto también regulará la manera en que los Ayuntamientos y comunidades autónomas podrán llegar a acuerdos con el Estado para la edificación de hasta 20.000 viviendas sociales.

Movilización progresiva

La segunda norma es un decreto ley "para impulsar la rehabilitación edificatoria y la promoción de vivienda en alquiler".

La fórmula del real decreto ley, explican en Transportes, es necesaria porque este texto modificará algunas leyes actuales, como la Ley de Propiedad Horizontal.

Pese a que los dos decretos ley suponen la movilización total de 5.520 millones de euros, está será progresiva. Para este año, los planes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez remitió a Europa contemplaban unos 1.150 millones. Los fondos procedentes de Bruselas pueden liberarse hasta 2023 y los proyectos que dependen de esos fondos tendrán un plazo de ejecución un poco más amplio. En la intervención sobre más de 500.000 viviendas que prevé Transportes, el ministerio se da como margen hasta 2026.